



COMITÉ PARA LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

ACTA RELATIVA A LA SESIÓN CT/SE/03/2022

En Mexicali, Baja California, siendo las nueve horas del día veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se reunieron en la sala de sesiones del Consejo de la Judicatura del Estado, los integrantes del Comité para la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, el Magistrado Nelson Alonso Kim Salas, el Consejero de la Judicatura, Lic. Francisco Javier Mercado Flores, la Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura, C.P. Rosaura Zamora Robles, el Director de la Unidad Jurídica y Asesoría Interna del Poder Judicial, Lic. Santiago Romero Osorio y la Directora de la Unidad de Transparencia, Maestra en Derecho Elsa Amalia Kuljacha Lerma, Secretaria Técnica del Comité, para celebrar la sesión extraordinaria CT/SE/03/2022.

La Secretaria Técnica del Comité da cuenta con la lista de asistencia de todos los integrantes del Comité, al Magistrado Presidente, quien declara la existencia de quórum legal, por lo cual se inicia esta sesión conforme a los artículos 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California; 39 y 42 del Reglamento de la Ley citada. Acto continuo, sometió a sus integrantes el orden del día en los siguientes términos:

ORDEN DEL DÍA

- I. Aprobación del orden del día
Por unanimidad se aprobó en sus términos.
- II. Asuntos a tratar:

ÚNICO. Procedimiento de clasificación de la información solicitada como confidencial 01/2022, derivado de la respuesta otorgada por la Directora de la Unidad de Transparencia, a la solicitud de acceso a la información 020058422000026, realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia.

Visto el proyecto de resolución presentado por la Secretaria Técnica, se puso a discusión el asunto y con las facultades que se le confieren al Comité, en las fracciones I y II del artículo 54, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de Baja California; 8 y 11 fracción XIII, del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California, se determina aprobarlo por sus propios y legales fundamentos y como consecuencia, **habrá de confirmarse la clasificación de la información solicitada como confidencial**, tomando en cuenta los antecedentes y consideraciones siguientes:

1) Antecedentes:

Mediante el registro del folio 020058422000026, en la Plataforma Nacional de Transparencia, el peticionario solicitó se le dé a conocer si durante el 2019-2021, existe en algún tribunal, números de expedientes, casos o juicios contenciosos, en los cuales se encuentre acreditada y ejerciendo como abogado defensor o representante activo la

La Directora de la Unidad de Transparencia manifiesta que **no es posible atender esta petición**, toda vez que: *“no existe ningún campo estadístico en el cual se pueda localizar la información por el nombre del abogado, defensor ó representante; los campos con los que se puede localizar la información en los sistemas informáticos son: en materia civil, familiar o mercantil, por número de expediente, nombre de las partes y tipo de juicio, y en materia penal, por número de causa, nombre de imputado y/o sentenciado y tipo de delito”,* agregando que por otra parte, *“la información que solicita es **información confidencial pues se trata de un dato de carácter personal y de la esfera privada de particulares**, consistente en conocer los números de expedientes, casos o juicios contenciosos en los cuales se encuentre acreditada ejerciendo como abogado defensor o representante activo un particular”* y después de fundar lo que se entiende por datos personales, expresa: *“**En este caso, la identificación de los asuntos en los que una persona ejerce como abogado o representante, son datos que corresponden a su esfera privada por lo que tal información debe ser protegida de terceros no autorizados. En efecto, si bien es cierto que en materia de transparencia y acceso a la información, toda actuación judicial que compone un expediente judicial es pública y admiten***

ser divulgadas en versión pública, en las que se suprima la información confidencial o reservada de los datos personales que en ellas obren, en el caso concreto **no se trata de transparentar y dar acceso a actuaciones judiciales, sino que se divulgue información que pertenece a la esfera privada de una persona determinada. Vistas así las cosas, no se trata de conocer sobre la actividad propia de este sujeto obligado y la rendición de cuentas correspondiente, en su función de impartir justicia, sino conocer sobre la actividad profesional o laboral de persona física determinada en juicios o procedimientos jurisdiccionales, ventilados ante los tribunales del Poder Judicial, motivo por el cual, esta autoridad no solo debe proteger y tutelar ese espacio de la vida privada de los particulares, sino que no está obligada a realizar una búsqueda requerida por un tercero extraño a los intereses legítimos de las partes en un juicio o tercero no autorizado. Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública para el Estado de Baja California que reza: "la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna, y solo podrá tener acceso a ella, los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello" y en el 184 del ordenamiento citado, que dispone: **Es obligación de los servidores públicos, buscar y proporcionar la información pública, que no se encuentre reservada o sea confidencial". En consecuencia la información solicitada es clasificada como confidencial y su acceso debe ser restringido a sus titulares, sus representantes y en su caso, a los servidores públicos facultados para ello**".**

2) Del acto de clasificación de la información solicitada:

Hecho el análisis del caso concreto, este Comité estima que le asiste la razón a la Titular de la Unidad de Transparencia, pues conforme al artículo 172 del Reglamento de la Ley de la materia se consideran datos personales, de manera enunciativa más no limitativa: la **información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física o jurídica que la identifica o hace identificable como lo es los números de expedientes, casos o juicios contenciosos en los cuales se encuentre acreditada y ejerciendo como abogado o representante una persona particular determinada; información que corresponde al ámbito privado profesional o laboral y que**

puede también identificar, cuando se relaciona esa información con las publicaciones del Boletín Judicial, a las personas o partes legítimamente interesadas en un proceso judicial, lo que a juicio de esta autoridad, debe ser protegido de terceros no autorizados, como ya quedó asentado.

A mayor abundamiento, debemos recordar que para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Constitución **distingue dos tipos de información**: aquella referida en la fracción I del apartado A del artículo 6to. Constitucional, que se denomina **información pública** y está referida a toda aquella que está en posesión de cualquier autoridad, entidades, órganos, organismos y de los Poderes del Estado e incluso a cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad y por otro lado, está la **información que se refiere a la vida privada y los datos personales**.

En la primera categoría está incluido todo aquel documento que dé cuenta de las actividades desarrolladas por los entes del estado en ejercicio de sus funciones y que, **entre otras cuestiones pueda transparentar la gestión pública, así como favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que éstos puedan valorar el desempeño de las autoridades**. Dicha información solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y de seguridad nacional, en los términos que fijan las leyes.

En la segunda categoría se ubica la información de los particulares, que el estado posee derivado de la natural interacción entre gobernantes y gobernados; esto es, se trata de información relacionada a diversos fines -tributarios, administrativos, mercantiles, de relaciones familiares, entre otros- que el estado posee para el mejor desarrollo de sus atribuciones. Dicha información será protegida en los términos y con las excepciones que fijan las leyes.

En materia de transparencia y acceso a la información, toda actuación judicial que compone un expediente judicial es pública, por regla general y, en todos los casos las

actuaciones judiciales admiten ser divulgadas en versión pública, en las que se suprima la información confidencial o reservada de los datos personales que en ellas obren.

Vistas así las cosas, se reitera, no se trata de conocer sobre la actividad propia de este sujeto obligado en su función de impartir justicia, sino conocer datos relacionados al ejercicio profesional de persona física determinada, ante los tribunales del Poder Judicial del Estado de Baja California, información que entra dentro del ámbito privado y no público, motivo por el cual, esta autoridad debe proteger y tutelar ese espacio de la vida privada de los particulares; máxime que no existe obligación de realizar la búsqueda requerida por un tercero extraño a los intereses legítimos de las partes en un juicio jurisdiccional.

Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California que reza: *"la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna, y solo podrán tener acceso a ella, los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello"* y en el 184 del ordenamiento citado, que dispone: *"Es obligación de los servidores públicos, buscar y proporcionar la información pública, que no se encuentre reservada o sea confidencial"*.

Para el acto de clasificación, cabe destacar que si bien es cierto que de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, toda información generada, administrada, adquirida, transformada o en posesión de Poder Judicial, por virtud del ejercicio de sus competencias, funciones y atribuciones, es pública, también lo es que ésta puede ser negada a terceros, mediante un acto debidamente fundado y motivado que la clasifique como confidencial y por ende, restringida al público y por otro lado, considerando que en el caso concreto, el acto de clasificación se hace con motivo de la recepción de una solicitud de acceso a la información, se exige además de la exposición de los motivos que la justifiquen, aplicar la prueba de daño, lo que implica en este caso, precisar la normatividad que expresamente le otorga el carácter de confidencial a la información solicitada y por otra,

determinar si con su difusión se causaría un serio perjuicio al interés o intereses públicos tutelados; es decir, la existencia de una expectativa razonable de daño presente, probable o específico, a lo que la doctrina ha denominado la prueba de daño.

Para efectos de lo anterior, en el caso concreto, para el acto de clasificación de la información solicitada como confidencial, encontramos como normatividad aplicable la siguiente: Artículos 4, fracciones VI, y XII, 106, 107, 109 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California; 4 fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California; 171, 172, 175, 176, 177 y relativos del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California.

De dicha normatividad se desprende, sin necesidad de interpretación, que la clasificación es un proceso mediante el cual el sujeto obligado determina si la información en su poder, encuadra en alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad.

Para dicha determinación, es necesario conocer la naturaleza de la información requerida, en el caso que nos ocupa, se solicita que se indique el número de expediente de un asunto de persona física determinada; esto es, si en el Poder Judicial existen juicios registrados en los cuales se encuentre acreditada y ejerciendo como abogada defensora o representante activo, que como ya quedó asentado, se trata de un dato de carácter personal, atendiendo lo establecido en el artículo 172 del Reglamento de la Ley de la materia que considera entre los datos personales, la información numérica, concerniente a una persona física o jurídica identificada o identificable y; en este caso, los números de los expedientes, son datos personales que relacionan e identifican a las personas o partes legítimamente interesadas en un proceso judicial, sean formales (abogados o representantes particulares) o materiales, lo que a juicio de esta autoridad, debe ser protegido de terceros no autorizados.

Para reforzar la afirmación anterior, cabe citar el documento publicado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información titulado "Metodología de Análisis de Riesgo BAA", que en su página 3, se reflexiona sobre la necesidad de **realizar una clasificación de los datos personales en función de tales variables que se presentan dentro de un análisis de riesgo** y clasifica a los datos personales en 4 categorías de acuerdo con la criticidad de los mismos y dentro de los datos de riesgo inherente medio, contempla entre otros los datos que permiten inferir el patrimonio de una persona, **datos de autenticación** y los **datos jurídicos**, tales como: antecedentes penales, amparos, demandas, contratos, **litigios** y cualquier tipo de información relativa a una persona que se encuentra sujeta a un procedimiento administrativo llevado en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal o administrativa. Información que sin duda, pertenece a la esfera jurídica privada de los particulares y, **para que pueda ser comunicada a terceros, requiere del consentimiento de sus titulares**, según se dispone en el artículo 176 del Reglamento de la Ley local de la materia, lo cual se justifica atendiendo la obligación legalmente establecida de proteger y resguardar la información confidencial o aquella clasificada como reservada, dispuesta por la Ley estatal de la materia, en el artículo 16, fracción VI, considerando que es innegable, **que la divulgación de estos datos representa un perjuicio real y significativo para sus titulares y del interés público de tutelar la vida privada y la intimidad de los particulares, ya que se trata de información que no es de interés general**, sino que se comprende dentro de los denominados datos personales que de acuerdo a la fracción VIII del artículo 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, **información de carácter confidencial**, acorde a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, la que en su artículo 4, fracción XII, establece que se entenderá por información confidencial: *"La información en posesión de los sujetos obligados que refiera a datos personales; (...) por lo que no puede ser difundida, publicada o dada a conocer, excepto en aquellos casos que así lo contemple la Ley General o la presente Ley"*, lo que se complementa con lo dispuesto en el precepto normativo 172, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado

de Baja California, que a la letra reza: *“Se consideran datos personales, de manera enunciativa más no limitativa: la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física o jurídica identificada o identificable, tales como el nombre, (...)”*.

Es importante reiterar en este apartado lo establecido en el diverso numeral 171 del Reglamento referido, de lo cual se desprende con meridiana claridad que los terceros no podrán tener acceso a la misma, salvo que cuenten con el consentimiento de sus titulares, como ya quedo señalado, lo que en el caso no sucede.

3) **De la prueba de daño.** Atendiendo a los diversos numerales 175 y 177 del Reglamento de la Ley estatal de la materia, considerando que la clasificación se hace con motivo de la recepción de una solicitud de acceso a la información pública del Poder Judicial del Estado, se procede a la exposición de los motivos que la justifiquen, mediante la aplicación de la prueba de daño, de conformidad con lo dispuesto en la ya citada Ley estatal, el Reglamento de la Ley local de Transparencia, los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y demás disposiciones aplicables.

En primer lugar, resulta pertinente citar el artículo Segundo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que indica que *se entenderá por “Prueba de daño: la argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados tendiente a acreditar que la divulgación de la información lesiona el interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla”*.

Así las cosas y, dada la obligación de demostrar de manera fundada y motivada, que la divulgación de información lesiona un bien jurídico tutelado por tratarse de información

concerniente a una persona física o jurídica identificada o identificable y que el daño que puede producirse con su publicidad, es mayor que el interés de conocerla, **al tratarse de datos personales de carácter confidencial protegidos por la Ley y que no se cuenta con la autorización de los titulares de los mismos, para su entrega o divulgación, la información de interés del peticionario debe clasificarse como confidencial y restringir su acceso.**

Efectivamente, con la aplicación de la prueba de daño, como sujeto obligado se debe justificar conforme al artículo 109 de la Ley de transparencia estatal, que: I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o de la seguridad nacional. A este respecto cabe decir que **liberar la información relacionada a los juicios en los que una persona determinada es parte o funge como abogado o representante, identificando el número de expediente de una persona física determinada, que se lleva a cabo en este Poder Judicial, representa un riesgo real de injerencia de toda índole en su vida privada, no autorizada, de ahí que no pueda liberarse la información, privilegiando el derecho a la privacidad de los particulares;** II. El riesgo o perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda. Del análisis del punto anterior, se advierte que el daño que se pudiese causar a los particulares al divulgar sus **datos personales de carácter jurídico, supera el interés público de que se conozcan, ya que no se puede suponer ningún interés público de liberarse, por lo que la clasificación de confidencialidad debe persistir, pues se reitera, que no se cuenta con el consentimiento necesario de su titular para la liberación de sus datos;** III. **La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.** La negativa o limitación al derecho de acceso a la información es proporcional a la protección de la privacidad e intimidad de los particulares y es el único medio para evitar el perjuicio, pues frente al marco constitucional vigente, en términos del artículo 1^{ro} de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta autoridad debe dar igual tratamiento en la protección de los derechos fundamentales,

tanto del solicitante de la información como de los sujetos de quienes se deben proteger sus datos personales.

4) De la aprobación del acto de clasificación. En virtud de lo fundado y motivado en los apartados anteriores, los integrantes del Comité, por unanimidad **ACUERDAN: Aprobar la clasificación de confidencialidad de los números de expedientes de procesos y procedimientos judiciales donde intervienen personas físicas determinadas, datos de carácter jurídico que corresponden al ámbito privado.**

Notifíquese y entréguese copia de esta acta al peticionario por conducto de la Unidad de Transparencia. Estando presente la Titular de la Unidad de Transparencia, se da por notificada de esta resolución.

Sin otro asunto que tratar, se cierra esta sesión, siendo las nueve horas con treinta minutos del día veinticuatro de enero de 2022.



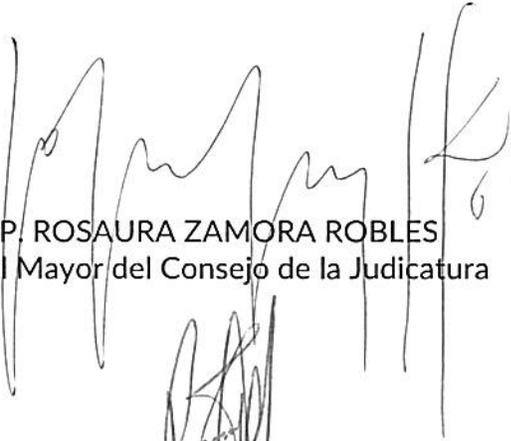
MAGISTRADO ALEJANDRO ISAAC FRAGOZO LÓPEZ
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Estado



MAGISTRADO NELSON ALONSO KIM SALAS
Adscrito a la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia



LIC. FRANCISCO JAVIER MERCADO FLORES
Consejero de la Judicatura del Estado



C.P. ROSAURA ZAMORA ROBLES
Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura



LIC. SANTIAGO ROMERO OSORIO
Director de la Unidad Jurídica y Asesoría Interna

M.D. ELSA AMALIA KULJACHA LERMA
Secretaria Técnica del Comité

Firma electrónica con fundamento en los artículos 1 fracciones I y II, 2, 3 fracciones I, II, XIX, XX, XXV y XXX, 4 fracciones I y II, 12 y 13, del Reglamento para el Uso del Expediente Electrónico y la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial del Estado de Baja California



PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA

Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado de Baja California Hoja de Evidencias Criptográficas

Archivo Firmado: F33_1153276.pdf

Proceso de Firma: 3403936

Autoridad Certificadora: AC del Poder Judicial del Estado de Baja California

Nombre:	ELSA AMALIA KULJACHA LERMA	Serie:	0000000000000007260
Fecha y Hora:	2022-01-24T11:55:20-08:00	Secuencia:	9658076
8f 51 33 dd a7 8a 7d f9 19 5b 5d 8f 7e 43 f0 ce 95 5f 85 96 d3 40 00 87 f2 a8 ba 14 72 7f 64 0c 59 04 ab c1 38 23 8e 83 ee 28 0c 8d 67 2d 82 0f 12 3f b5 d5 8a 8e e9 f4 96 a8 f7 20 a4 81 ef 10 3b b5 40 d3 ec 11 7b e0 71 8c 9d d6 d1 41 35 48 ec bb 0d 88 b0 57 c1 9f 5d 50 66 42 cd 78 1a c6 4e 10 99 eb 91 c6 a7 a8 44 82 bc fb 0a e4 32 4f 45 a6 3f 14 32 da df c8 fc 1f 7f f9 d5 9e bb 3f 93 e1 d0 a0 c1 0b b5 b3 ba 3f 00 f1 7f 7a 5c 64 4e 79 a9 83 47 73 0e 24 d2 0f 0a 37 21 5b 9b 2a ab be f5 72 14 71 22 9d b5 63 0d 28 05 22 a1 7e 80 fe 77 80 07 cd b6 4f 40 d5 11 1b 8b d8 e4 f4 d1 cb 35 1e 2a c7 4e bf 4e 3f 86 1e 6e 8d 92 46 71 16 06 81 73 e1 e6 60 28 2b 7d 35 19 57 e2 6f a0 53 45 0d 09 d8 eb c3 c1 94 51 16 0f dc e7 4a a7 a6 c8 fe 1b f7 a7 42 3d d8 d1 5e 25 49 72 6c			
Datos estampillados:	4FA40E1C5D54DCAF620EE971E36FA19ED1273941A4F8AB8A7B4FBD3078786927		



FIRMADO POR:
- ELSA AMALIA KULJACHA LERMA
PROCESO DE FIRMA: 3403936

La validez de este documento puede ser verificada en la siguiente página

<https://tribunalelectronico.pjbc.gob.mx/Firma/validacion>

4FA40E1C5D54DCAF620EE971E36FA19ED1273941A4F8AB8A7B4FBD3078786927